

especial para El Norte, edición del 23 de octubre de 1990

FAX 6116441

Protagonistas del relevo múltiple (Un relevo múltiple)
miguel ángel granados chapa

Un político dirigirá un banco; un banquero hará las labores de inteligencia (información y seguridad); un policía defenderá a los consumidores; y un militar combatirá el narcotráfico; un antiguo procurador organizará las elecciones. Ese es el panorama después de una semana de intensos cambios en la administración federal. No se trata de relevos que interesen sólo a los funcionarios públicos, porque se refieren a actividades de importancia para los ciudadanos. Y no se trata, tampoco, de meros reacomodos administrativos, sino que pueden tener trascendencia política.

Todo empezó con la designación de Emilio Chuayfett Chemor como director general del Instituto Federal Electoral. Como se sabe, este nuevo organismo fue creado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que está entrando en vigor, y que sustituye, con funciones ampliadas, a la Comisión Federal Electoral. Entre sus innovaciones se cuenta el que haya una dirección general, cuyo primer titular fue Chuayfett. Este, de familia mexiquense, actuó primero en el Distrito Federal pero después volvió a Toluca, donde en sucesivos gobiernos fue ~~XXXXXX~~ alcalde y secretario de Educación local. Reemplazó a Ignacio Pichardo Pagaza en la Procuraduría Federal del Consumidor, en noviembre del año pasado, y antes de cumplir un año en sus funciones se le designó para inaugurar el IFE.

Su vacante en la Procuraduría del Consumidor fue prontamente llenada por el subprocurador de la República, encargado de la investigación y la persecución del narcotráfico, Javier Coello Trejo. Es, de las personalidades involucradas en este relevo múltiple, la más discutida y polémica.

Abogado chiapaneco, se dio a conocer a la opinión pública hace más de diez años, cuando se le designó agente del ministerio público federal para asuntos especiales. Esos asuntos consistieron en investigar delitos cometidos por altos funcionarios de la administración de Echeverría, entre ellos Fausto Cantú Peña, que ha narrado en un libro los pormenores de su detención y el trato que

recibió del llamado "fiscal de hierro". Una tarea como esa no está destinada a tener larga duración, porque implica un desgaste del que nadie se escapa. Para su fortuna, Coello Trejo fue invitado a servir como secretario general de gobierno en su estado natal. Lo designó el gobernador Absalón Castellanos Domínguez, un general que contó entre las malas selecciones hechas por López Portillo para ocuparse de la gobernación de los estados. A su vez, el nombramiento que hizo de Coello fue también desacertado. Lo propio hubiera sido escoger a alguien cuya personalidad contrastara con la del gobernador, soldado rudo y poco dado a las formalidades de la negociación política. El oficio que Coello adquirió como fiscal fue aplicado a tareas en que la persuasión, no la persecución, es actividad indispensable. Chiapas, además, es una entidad dañada por innúmeros problemas sociales, lo que suscita permanentes conflictos, que tienen como parte más débil a etnias y grupos sociales marginados. Contra ellos se cebó, más de una vez, la energía desplegada por el secretario general de Gobierno, que alentaba los impulsos del gobernador por las decisiones de tipo castrense, en vez de servir como su contrapeso. Por ello no hizo huesos viejos en el gobierno, y se retiró a la práctica privada de su profesión, donde ganó mucho dinero.

Al comenzar este gobierno, por la fama ganada en sus anteriores menesteres públicos, se le hizo responsable de la lucha contra el narcotráfico. Sin dejar de depender del Procurador Enrique Alvarez del Castillo, tenía amplios márgenes de autonomía, y una personalidad política propia. Fue, por ejemplo, el delegado mexicano a la ^{conferencia} ~~convención~~ internacional sobre el narcotráfico celebrada en Viena, siendo que en la reunión precedente la representación mexicana había sido ostentada por el propio Procurador Sergio García Ramírez. Se le destinó un importante número de agentes del ministerio público, y casi la mitad de los tres mil agentes de la policía judicial federal, y desplegó una intensa actividad. Logró resultados notables, gracias a una combinación de factores, en que no estaba ausente su propia capacidad, pero que no ~~resultó~~ dependieron sólo de ella, ni de su habilidad para encauzar el trabajo de sus subordinados. La mejor relación entre

la DEA y la Procuraduría mexicana produjo un flujo de información que permitió frecuentes y contundentes golpes al negocio de las drogas. Pero el hecho es que se consiguieron éxitos sonados, aun en materias no relacionadas directamente con el narcotráfico, como fue el rescate de las joyas robadas al Museo Nacional de Antropología.

Pero en el cuerpo encabezado por Coello fue gestándose, desde el principio de sus funciones, un fenómeno de arbitrariedad y corrupción creciente, que pronto puso pavor en numerosos núcleos de ciudadanos. Una vejación aquí, un acto de violencia allá, una intromisión acullá, un exceso allí: se multiplicaban las informaciones sobre un modo de trabajar que pasaba por encima de la ley con demasiada frecuencia. Con todo, mientras los abusos parecían o estaban vinculados a la misión específica que se le había asignado, de combatir a los narcos, la opinión extendía una cierta comprensión y aun tolerancia, conociendo las dificultades de transitar en el lodo sin mancha.

Pero este año se barruntó que la autonomía de que estaba gozando la corporación acaudillada por Coello Trejo servía para ocultar delitos que nada tenían que ver con el narcotráfico. ~~XXXXXXXX~~ Violaciones a mujeres indefensas, por ejemplo. La policía judicial del Distrito Federal avariguó un cúmulo de denuncias sobre ataques a 19 mujeres, todas en el sur de la ciudad de México, y presumió que se trataba de agentes federales. Se precisó después que eran miembros de la escolta de Coello Trejo mismo. Este puso el grito en el cielo. Pretendió impedir que la indagación continuara. Avaló la conducta de su personal, le ofreció coartadas y más tarde, cuando las víctimas identificaron a algunos de esos agentes como efectivamente sus agraviantes, puso a su disposición recursos públicos para que emprendieran su defensa. Más todavía: sugirió por diversas vías que sólo se trataba de una pugna entre policías, o que el Procurador del DF quería sustituir al de la República y por eso pretendía despestigiarlo. Y hasta llegó a insinuar que quienes lo cuestionaban a él, o acusaban a sus muchachos, estaban en realidad sirviendo al narcotráfico, maltrecho por los severos golpes que le había asestado.

Los miembros de su escolta acusados están bajo proceso, lo cual implica que si se trata en verdad de una querrela interna en la procuración de justicia, o de una conspiración, el poder judicial está también involucrado, pensar lo cual sería en este caso un exceso. Como refuerzo adicional a la pésima opinión que el público había ido formándose de los combatientes dentro las drogas, está la posición de varios gobernadores lesionados aun directamente por esos agentes; la del propio Presidente de la República, que llegó a formular varias declaraciones o a tomar medidas relacionadas con el asunto; y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada entre otros con motivo de los desmanes de la PJF, que por lo mismo se refirió en sus primeras actuaciones profusamente a esa corporación. Ante el peso de tales evidencias, Coello Trejo tuvo que ser relevado, y se aprovechó para ello el hueco dejado por Chuayfett en la Procuraduría del Consumidor.

La tarea de Coello, con otra designación y otro enfoque, porque su sucesor no es abogado, título requerido para jefaturar agentes del ministerio público, fue encargada a un funcionario competente y honesto, el general brigadier retirado Jorge Carrillo Olea. Ex miembro del estado mayor presidencial, recibió en 1976, aunque fuera por unos pocos meses, una oportunidad dorada: la de ser nombrado subsecretario de Estado como primer cargo en la administración. El puesto, sin embargo, no le quedó grande. Se trataba de combatir el contrabando, misión de la subsecretaría de Inspección de la Secretaría de Hacienda. Carrillo Olea realizó tan satisfactoriamente su tarea, que continuó en altos cargos en la administración pública, como director de una empresa descentralizada, Astilleros Unidos, y luego otra vez como subsecretario, esta vez de Gobernación, responsable de la seguridad nacional. Lo designó para ese puesto el Presidente De la Madrid, con quien había trabado una amistad que el tiempo acendró, cuando coincidieron como subsecretarios en 1976. Al terminar su trabajo en Gobernación, Carrillo Olea se encargó de dirigir el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que él mismo había diseñado y organizado, para sustituir a la nefesta Direc

relevos/5

ción Federal de Seguridad, de triste memoria.

Al quedar acéfalo ese centro, fue llamado para dirigirlo Fernando del Villar Moreno, un economista que a la fecha dirigía el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Esta designación es extraña, porque los antecedentes de Del Villar no parecen hacerlo el indicado para ello, salvo porque su vinculación personalísima con el Presidente Salinas ~~XXXXXXX~~ explicaría la decisión. Eso implicaría que la confianza presidencial en Del Villar es factor más importante que su eventual pericia. Del Villar es un economista, comoaño de banca del Presidente, que fue delegado del PRI en Tabasco, en la primera elección difícil que enfrentó el partido oficial después de su estremecimiento de julio de 1988.

En fin, para reemplazar a Del Villar fue designado Gustavo Carvajal Moreno. Hay aquí también ingredientes de extrañeza. No asombra que para dirigir un banco fuera llamado un político, como Carvajal. Hay antecedentes en tal sentido, pues el secretario de Gobernación del segundo tramo de López Portillo, Enrique Olivares Santana, dirigió después ese mismo Banco. Y que sus tareas son políticas, además de financieras, lo muestra el hecho de que debe relacionarse estrechamente con gobiernos estatales y municipales, que constituyen su clientela. También por esa vocación, digamos política, fue escogido por López Portillo para que otorgara el gran crédito que en 1981 contribuyó a la salvación del Grupo Alfa, que en ese momento debe haber depuesto, así fuera circunstancialmente, su crítica a la participación del Estado en la economía. Lo extraño no es, pues, el nombramiento de un político, sino el que sea precisamente Carvajal, quien a duras penas cumplía con la misión de dismantelar Tabamex, y no pertenece al equipo más inmediatamente ligado al Presidente.

El lazo común que une las dos últimas designaciones es Manuel Camacho. Del Villar y Carvajal están próximos al regente de la ciudad de México, de modo que si este trasiego de funcionarios tiene algún sentido en el ámbito de las relaciones internas de poder, ese sentido beneficia al salinista número uno.